



Chávez: Radicalizando la Revolución

Libertad y desarrollo

Con los recursos financieros del Estado evaporándose, Chávez insiste en incrementar su autoritarismo para mantenerse en el poder. Es probable que el anuncio de una variedad de polémicos proyectos de leyes en contra del derecho de propiedad y la libertad de expresión se haga efectivas, con el fin de consolidar su 'socialismo del siglo XXI'.

Hugo Chávez, permanentemente ha defendido la legitimidad de su gobierno invocando sus orígenes democráticos, y el apoyo a sus referéndums que permitieron su reelección indefinida y una amplia mayoría en la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el parlamento venezolano, compuesto en su totalidad por sus partidarios le ha delegado amplísimas facultades legislativas que han debilitado cada vez más los frenos y equilibrios del sistema político. Por otra parte, el auspicioso escenario económico que había precedido su revolución chavista ha cambiado.

Con los recursos financieros del Estado evaporándose, Chávez insiste en incrementar su autoritarismo para mantenerse en el poder. Es probable que el anuncio de una variedad de polémicos proyectos de leyes en contra del derecho de propiedad y la libertad de expresión se hagan efectivas, con el fin de consolidar su "socialismo del siglo XXI". El resultado, tras una turbulenta década de administración chavista, es evidente: Venezuela ha perdido su calificación de país Libre, especialmente por las transgresiones a las libertades civiles, como lo evidencia el índice de Libertad en el Mundo, de Freedom House (2008).



Los motores del Socialismo se alimentan con petróleo

El gobierno chavista controla gran parte de la actividad económica, tras la estatización de empresas de hidrocarburos, cediendo el control de las operaciones primarias a la estatal de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Es así como Venezuela, en lo económico, tuvo años de bonanza, beneficiada por el alto precio del petróleo, acompañado de declinación de las reservas norteamericanas y el constante crecimiento de la demanda china. Es así como, a pesar de su discurso de “desarrollo endógeno” y diversificación económica, Venezuela es más dependiente ahora del petróleo de lo que era cuando Chávez asumió el poder. En 1998 el valor de las exportaciones petroleras representaban el 69% de todas las exportaciones, mientras que en 2008 el 94%, un alza de 25 puntos porcentuales. Esta situación le permitió a Chávez financiar “empresas de producción social” y otras iniciativas “no capitalistas” de desarrollo, además de subvencionar la venta de petróleo a países amigos (como Cuba y Bolivia).

Durante su gestión, el motor de la economía ha sido el gasto público. La compañía petrolera estatal corre ahora como un proyecto político y produce alrededor de una cuarta parte menos de petróleo de lo que generaba hace una década, mientras que su deuda casi se ha duplicado. Es así, como la drástica disminución de los ingresos obtenidos por PDVSA debido a la caída de la producción, se sumó a la caída desde mediados del año pasado de los precios mundiales del petróleo. El precio durante 2008 ha descendido de un peak de US\$134 hasta llegar a los US\$40. La dependencia del crudo ha revelado una deficiencia estructural de la economía.

A su vez, durante su gestión se ha perseguido al sector privado y han disminuido los incentivos para el desarrollo del sector industrial no relacionado con el petróleo. En este sentido, las importaciones han



aumentado mucho más rápidamente que la producción local. Esa tendencia ahora parece insostenible en el mediano plazo. A pesar de que el precio del petróleo se ha recuperado, este nivel es todavía demasiado bajo para aliviar las presiones sobre el financiamiento estatal. A su vez, las crecientes subvenciones e importaciones de alimentos, pueden convertirse pronto en un problema. En la actualidad Venezuela posee “un presupuesto deficitario, una inflación cuatro veces mayor a la del resto de los países latinoamericanos, escasez de alimentos y una persistente polarización social”.

No obstante, Hugo Chávez en vez de buscar el diálogo que le permita afrontar mejor la delicada situación del país, ha radicalizado su postura, aumentado sus arbitrariedades e inobservancia al Estado de Derecho.

Persecución política

Paralelamente a la mala situación económica, el panorama político también se muestra ensombrecido. La “violencia y la intimidación de la oposición por las fuerzas de seguridad y por grupos de civiles armados (algunos abiertamente vinculados al gobierno) han aumentado”. A su vez, las políticas de Chávez reflejan una tendencia hacia el debilitamiento del gobierno local y regional. Envalentonado tras ganar el 15 de febrero el referéndum que le permite mantenerse en el cargo que ha ostentado desde 1999 indefinidamente, “se ha embarcado en una cada vez más agresiva campaña no sólo contra el sector privado sino también en contra de sus adversarios políticos, sobre todo gobernadores y alcaldes de oposición elegidos el pasado mes de noviembre”. Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo (la segunda ciudad más grande de Venezuela) y principal opositor al régimen de Hugo Chávez, pasó a la clandestinidad después de alegar hostigamiento por parte de los servicios de inteligencia y en abril solicitó y obtuvo asilo político en el Perú. Con Rosales, ya son tres los políticos venezolanos asilados en ese país.

Durante la administración chavista, Venezuela se ha alejado de los



principios que inspiran los Estados democráticos. Los derechos civiles, los derechos políticos y la libertad de prensa, que están consagrados en la Constitución, han sido consistentemente vulnerados por el Ejecutivo, con la anuencia y el respaldo de los restantes poderes públicos. En este sentido, los alcaldes han encontrado dificultades para ejercer el poder. El nuevo alcalde de oposición de Caracas, Antonio Ledezma, ha sufrido ocupaciones de la sede de la alcaldía y otras dependencias por grupos armados chavistas. El gobierno se ha negado a intervenir, aduciendo responsabilidad de Ledezma al no renovar los contratos de miles de trabajadores contratados por su predecesor chavista. Posteriormente, en una acción bastante cuestionable, la oficialista Asamblea Nacional ha disminuido los poderes del alcalde para administrar recursos. Destinándose ahora parte importante de los ingresos municipales al "Jefe de Gobierno", una figura paralela de exclusiva confianza del Presidente.

El mandatario venezolano "también ha quitado a los ejecutivos regionales en manos de la oposición la administración de los hospitales y centros educativos, lo que ha sido condenado por los líderes opositores".

A pesar de que Ledezma había interpuesto acciones en el Tribunal Supremo de Justicia y en la Sala Constitucional contra esta ley denominada Distrito Capital, no fue atendido. Realizó una huelga de hambre, junto a otros funcionarios, durante cinco días en la sede de la OEA en Caracas para llamar la atención internacional sobre su caso. Ledezma busca que se constate la grave situación de la democracia en Venezuela; que se entreguen de inmediato los recursos para la cancelación de sueldos (que se les adeuda hace meses); se detenga el proceso de desmantelamiento de la Alcaldía Metropolitana; y se respete la legitimidad de los gobernadores de oposición, quienes sufren permanente hostigamiento por parte del Gobierno. No obstante, lo que ocurre en Venezuela es ilegítimo. El control que debería ejercer el Legislativo y Judicial sobre el Ejecutivo ha desaparecido.



Persecución a los Medios de Comunicación

La libertad de expresión e información es un valor que el gobierno venezolano intenta suprimir definitivamente, especialmente cuando la situación económica es cada vez menos auspiciosa. En este orden de cosas, Chávez utiliza arbitrariamente los medios de comunicación estatales y se encuentra en continuo conflicto con los medios privados. Cada vez son más explícitas las amenazas, bajo el supuesto de que mienten e intoxican la mente de los ciudadanos. Como la prensa se ha convertido en el mayor enemigo con el que se ha topado la instauración del modelo socialista del siglo XXI, ya hace dos años –mayo de 2007- revocó la concesión del canal “Radio Caracas Televisión” (RCTV). Esta situación encerraba un objetivo estratégico, porque era el único canal no estatal que transmitía con cobertura nacional.

Mientras, el gobierno ha construido un imperio mediático. De la docena de canales gratuitos de televisión, controla seis, así como cientos de estaciones de radio y decenas de periódicos y revistas. Además, el Presidente ha decretado su derecho a interrumpir todas las emisiones de radio y TV, sin previo aviso, durante el tiempo que estime necesario. Aún así, el gobierno se presenta a sí mismo como víctima del terrorismo mediático. En este sentido, los órganos del Estado están dirigidos hacia el último canal nacional crítico de su gestión, Globovisión. Pero esta semana una abrumadora ofensiva oficial contra la prensa alcanzó un nivel sin precedentes, con la posibilidad real de cierre de 258 emisoras de radio y televisión y crecientes presiones contra medios impresos.

Estas medidas anunciadas por el gobierno y entidades como la Fiscalía General y la Asamblea Nacional, abarcan desde la regulación de la televisión por cable hasta la cancelación de concesiones de radioemisoras privadas, pasando por una reforma de media docena de



leyes para ampliar las prohibiciones y endurecer las sanciones contra medios de comunicación.

Bajo el argumento de que ninguno de estos medios actualizó sus datos ante Conatel y que se persigue "democratizar el uso del espectro radioeléctrico", las emisoras que podrían perder la concesión representan el 40% del total bajo control privado en el país. Estos anuncios se produjeron como la reacción a una campaña de anuncios publicitarios promovida por dos organizaciones no gubernamentales, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) y AsoEsfuerzo, contra la Ley de Responsabilidad Social que discute actualmente la Asamblea Nacional. Se evidencia así que las nuevas medidas son contrarias a la libertad de expresión y vienen a dañar aún más la democracia.

Conclusiones

Durante la administración chavista, Venezuela se ha alejado de los principios que inspiran los Estados democráticos. Los derechos civiles, los derechos políticos y la libertad de prensa, que están consagrados en la Constitución, han sido consistentemente vulnerados por el Ejecutivo, con la anuencia y el respaldo de los restantes poderes públicos. La situación no parece mejorar en el corto plazo, sino que sin la ayuda de los petrodólares, el régimen chavista se verá debilitado, con el consiguiente efecto en su popularidad. De ahí que un primer paso es la fuerte ofensiva para inmovilizar a la oposición, siguiendo con las medidas para silenciar las críticas en la prensa. De esta forma, esta revolución se está radicalizando, avanzando con pasos firmes a un esquema de carácter totalitario. El mayor problema es que la comunidad internacional sólo se ha situado como espectador.

